

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, doce (12) de diciembre dos mil veintitrés (2023)

Apelación auto
Exp.004-2021-00425-01

Vencido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra el auto que resolvió las excepciones y dispuso continuar la ejecución dentro del proceso ejecutivo a continuación del ordinario que adelanta en su contra MARTHA CECILIA BARRERA GALLEGO.

ANTECEDENTES:

Por auto que se emitió el 09 de agosto de 2022, el juzgado de conocimiento que lo es el Cuarto Laboral del Circuito de Medellín libró mandamiento de pago, por la suma de \$1.549.964.444,79 por concepto de mesadas pensionales adeudadas entre el 23 de junio de 2006 y hasta junio de 2020, el valor de \$357.773.128 por indexación hasta el 31 de marzo de 2019 y \$578.100 por costas del proceso ordinario (Archivo 04).

Luego de ser notificada, la ejecutada propuso las excepciones de pago, prescripción y compensación. Al respecto, señaló que mediante la resolución N° RDP 9294 del 15 de abril de 2020 la Unidad dio cumplimiento a la providencia emitida por la H. Corte Suprema de Justicia el 07 de mayo de 2019, modificada y adicionada por Resoluciones DRP 13482 del 11 de junio de 2020 y RDP 014451 del 09 de junio de 2021, para luego revocar la última,

ordenándose unas compensaciones por la Resolución RDP 019078 del 30 de julio de 2021, dejando condicionado el pago del retroactivo. Señaló que en favor de la ejecutante se procesaron pagos por la suma de \$34.579.890 con cargo a la señora Amparo del Socorro Tapias Valencia, adeudándose un retroactivo de \$1.697.139.278,24. Explicó que como se trata de nuevos beneficiarios, existe el mecanismo de la compensación para evitar una doble erogación a cargo del Estado, debiendo ser devueltos por los beneficiarios iniciales los dineros percibidos en el pasado hasta lograr que se ajusten los porcentajes definitivos desde la causación del derecho pensional. Sobre la prescripción, acudió al soporte normativo y jurisprudencial; y sobre la compensación se limitó a solicitar su aplicación (Archivo 06).

En audiencia que se celebró el 07 de septiembre de 2023, el Juzgado de conocimiento DECLARÓ probada parcialmente la excepción de pago, referida únicamente a los valores cancelados (parciales) por la UGPP por concepto de compensaciones y que ascienden al mes de agosto de 2022 a \$34.579.890. Mantuvo la medida cautelar decretada. ORDENÓ seguir adelante con la ejecución conforme al mandamiento de pago del 09 de agosto de 2022, debiendo tenerse en cuenta los pagos parciales. CONDENÓ en costas a la UGPP en un 7% del valor del crédito.

Frente a la anterior determinación, la ejecutada interpuso el recurso vertical solicitando su revocatoria, en tanto considera que debe prosperar la excepción de pago de manera completa toda vez que mediante Resolución RDP13482 del 11 de junio de 2020 fue incluida en nómina de pensionados a la señora Martha Cecilia Barrera Gallego encontrándose actualmente activa en nómina con una mesada de \$16.761.383. Adicionalmente, solicita la suspensión del proceso por razón de haberse promovido un proceso de Nulidad y restablecimiento del derecho contra la señora Amparo del Socorro Tapias Valencia y la señora Barrera Gallego, encontrándose actualmente pendiente de sentencia, lo que genera una prejudicialidad (Min 50:15 Archivo 18).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

A partir del artículo 442 del CGP, aplicable por remisión analógica por lo previsto en el art 145 del estatuto adjetivo laboral, en estos asuntos en que la orden de apremio se basa en una sentencia judicial, solo se pueden proponer entre otras excepciones, la relativa al pago de la obligación, imponiéndole al ejecutado, la misma disposición, que al proponerla se alleguen los medios de prueba en los que se funda.

Así es, pues por pago se entiende la prestación de lo que se adeuda, según el art 1626 del Código Civil, correspondiéndole acreditar la extinción de la obligación por este medio, a quien la alega, según el artículo 1757 del mismo estatuto.

En el caso, la obligación consistía conforme a la providencia emitida por la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral el 07 de mayo de 2019 que casó (Págs. 1355-1379 Archivo 01), en pagar de parte de la UGPP y en favor de Martha Cecilia Barrera Gallego una pensión de sobrevivientes a partir del 23 de junio de 2006 en cuantía de \$6.273.282.63, con un retroactivo de \$1.376.523.837.76 hasta el 31 de marzo de 2019, cuya mesada pensional para el año 2019 equivale a \$10.687.451.67, y una indexación por \$357.773.128.80.

Por Resolución RDP 009294 del 15 de abril de 2020 (Págs. 91-95 Archivo 03) la UGPP dio cumplimiento a la orden judicial, procediendo con la inclusión de la señora Martha Cecilia Barrera Gallego en la nómina de pensionados a partir del julio de 2020 con distribución del derecho en un 63.80 en favor de esta beneficiaria, y el otro 36.20% en favor de Amparo del Socorro Tapias Valencia, dejando expresamente pendiente el pago de costas, del retroactivo pensional y la indexación. Posteriormente se emitió el acto administrativo RDP 019078 del 30 de julio de 2021 que modificó esa decisión y dispuso las compensaciones a las que hubiera lugar de las mesadas futuras de Amparo del Socorro Tapias Valencia, ordenando el reporte del pago a la señora Martha Cecilia Barrera mes a mes hasta satisfacer el retroactivo (Págs. 96-103 Archivo 03).

Conforme se desprende de lo advertido por la entidad desde el escrito de excepciones presentado y los cupones de pago arrimados (Págs. 138-167 Archivo 03), lo que aflora es que la entidad ha procedido con el pago efectivo de las mesadas pensionales causadas a partir de julio de 2020, pero respecto al retroactivo indexado que fue ordenado no se ha satisfecho, pues solo se acredita el pago efectivo de la suma de \$34.579.890 y aun cuando aduce la compensación frente a las mesadas futuras de Amparo del Socorro Tapias como la inicial beneficiaria, la orden judicial emitida lo fue en dirección de la UGPP y no de la señora Tapias, por lo que está a su cargo dar satisfacción a las mesadas adeudadas a la ejecutante, sin perjuicio de los trámites e intervenciones administrativas que lleve a cabo la entidad para ese cumplimiento sin que le implique una retribución doble de la erogación prestacional, panorama bajo el cual es irrazonado dar prosperidad total a la excepción de pago, si la señora Martha Cecilia Barrero Gallego no ha visto cubierta la totalidad de la obligación que le fue concedida y que continúa estando a cargo de la Unidad ejecutada.

Sobre la prejudicialidad mencionada en el recurso, no encuentra esta Sala de Decisión competencia para pronunciarse sobre este aspecto, en tanto no se ha puesto en conocimiento del Juez de Instancia tal requerimiento para desde la postura adoptada cuestionar los argumentos de lo decidido y conllevar a que en esta sede sea posible dar análisis a lo definido y a los argumentos del disenso y dar razón o no a la petente; aun en ese contexto, debe recordarse que para que pueda hablarse de la prejudicialidad, es necesario que en un proceso exista una cuestión sustancial que debe ser decidida en proceso diferente y que mientras no se resuelva, sea imposible pronunciarse sobre el objeto de la controversia, en razón a la estrecha relación existente entre ambos; pero como se está ante un trámite de ejecución cae en vacío lo pedido, porque además que el artículo 161 del CGP puntualiza que la solicitud de suspensión debe plantearse antes de la sentencia, se trata de un derecho ya definido a cargo de la UGPP, cuyo cumplimiento no se halla supeditado a los resultados de un proceso administrativo de restablecimiento frente a Amparo del Socorro Tapias, pues ello, en nada altera, modifica o elimina la obligación impuesta y que a la fecha es ejecutivamente exigible.


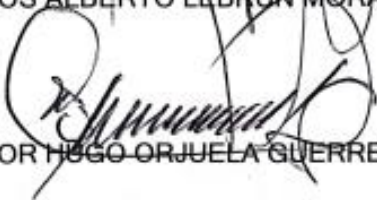
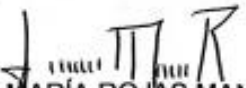
Siguiendo los lineamientos del artículo 365 del CGP, las costas en esta instancia son a cargo de la ejecutada. Se fijan como agencias en derecho de la segunda instancia la suma de \$1.040.000.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **CONFIRMA** el auto apelado de fecha y procedencia conocidas. Costas como quedó dicho.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS**.

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Certifico: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 214 fijados el 13 de diciembre de 2023 en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El Secretario.